



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

El derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal: del derecho a la intimidad a los derechos ARCO

Autor/es

GONZALO PARDO SAINZ

Director/es

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2017-18



El derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal: del derecho a la intimidad a los derechos ARCO, de GONZALO PARDO SAINZ
(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TÍTULO:

La protección de datos de carácter personal:
del derecho a la intimidad a los Derechos ARCO.

AUTOR:

Gonzalo Pardo Sainz

TUTOR:

José Martínez de Pisón Caveró

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

GRADO EN DERECHO

CURSO 2017-2018

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se llevará a cabo una recapitulación de la evolución y desarrollo del derecho a la intimidad hasta la concepción actual. A lo largo del mismo se irá enfocando la repercusión que tiene la informática en éste, redirigiéndolo hacia el derecho a la Protección de Datos y a cómo el ordenamiento jurídico español se ha adaptado a esta nueva rama del Derecho. Así, se tratará de realizar una recopilación general de la normativa que lo regula, tanto nacional como internacional, y de las herramientas de que dispone el ciudadano para ejercitarlo. Desde un punto de vista jurídico, se analizará, en definitiva, el porqué de la necesidad y de la importancia de este “nuevo” derecho.

PALABRAS CLAVE

Intimidad, privacidad, datos personales, informática, Derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal, TIC.

ABSTRACT

In the present research work, a recapitulation of the evolution and development of the right to intimacy will be carried out up to the current conception. Throughout it will focus on the impact that information technology has on it, redirecting it towards the right to Data Protection and how the Spanish legal system has adapted to this new branch of Law. Thus, it will try to make a general compilation of the regulations that regulate it, both nationally and internationally, and the tools available to the citizen to exercise it. From a legal point of view, it will be analyzed, in short, the reason for the need and the importance of this "new" right.

KEY WORDS

Privacy, personal data, Internet, the Right to Data Protection, ICT.

ÍNDICE

I. INTRODUCCION.....	5
I. I. Notas preliminares.....	5
I. II. Precisiones terminologicas.....	6
 II. EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD.....	7
II. I. Primeros pasos.....	7
II. II. Aproximación a la actual perspectiva constitucional del derecho a la intimidad.....	8
II. III. Límites.....	14
II. III. A) Diferenciación entre el derecho a la propia imagen, el derecho al honor y el derecho a la intimidad personal y familiar.....	14
II. III. B) Libertad de expresión y libertad de información.....	15
 III. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.....	16
III. I. Hacia un derecho fundamental y autónomo.....	16
III. I. A) La intimidad y la libertad de información.....	16
III. I. B) La autodeterminación informática o informativa.....	18
III. I. C) Tensión entre intimidad e informática.....	20
III. II. Habeas Data.....	22
III. III. Los denominados “Derechos ARCO”.....	24
III. IV. Derecho al Olvido Digital.....	30
 IV. PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD INFORMÁTICA A TRAVÉS DE LEYES DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.....	35
IV. I. Ámbito nacional: Regulacion anterior (LORTAD) y regulación vigente (LOPD).....	35
IV. II. Ámbito internacional: Las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE del	

*Parlamento Europeo y del Consejo, de 1995 y 1997 respectivamente; y el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE..... 37*

V. CONCLUSIONES..... 42

VII. BIBLIOGRAFÍA..... 45

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación acomete el controvertido tema del derecho a la intimidad, buscando, antetodo, una aproximación tanto conceptual como doctrinal a la rama del derecho informático y la protección de datos de carácter personal.

Antes de comenzar con el análisis íntegro del derecho a la intimidad, es recomendable partir de una serie de conceptos que conformarán los pilares sobre los que construir el tema a tratar. Estos conceptos engloban limitadamente el recorrido que se desprende del derecho a la intimidad.

I. I. Notas preliminares

Al hablar del derecho a la intimidad personal y familiar se debe entender el mismo como inherente al desarrollo de la personalidad del ser humano, queriéndose decir con esto que el respeto a la intimidad no se alcanza si no se circunscribe su aplicación al respeto de la dignidad humana. No obstante, aunque pueda parecer que dicho contenido aparece delimitado en la actualidad, desde una perspectiva jurídica se trata de un concepto que no tiene una definición precisa, lo que provoca la existencia de cierta dificultad para encontrar un significado universal y de aplicación general.¹

A pesar de ello, en los últimos años surge una nueva rama del Derecho que encuentra su principal precedente en el estudio realizado por dos juristas norteamericanos, Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis, y que como indica PÉREZ LUÑO², sienta “las bases técnico-jurídicas de la noción de la *privacy*”, que vendría a resultar el término análogo a la intimidad que hoy conocemos. Esta nueva rama del Derecho encuentra su enlace con el derecho a la intimidad en la protección de datos personales.

Será ese *right to privacy* lo que se acabe considerando como un derecho de la persona humana, diferente a los demás derechos existentes (patrimoniales o extrapatrimoniales) y que se adecuará a la evolución tecnológica que sufre la sociedad como consecuencia del constante desarrollo de este campo, surgiendo así una nueva

1 PÉREZ LUÑO, A. E. *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid-2005, pág. 323.

2 PÉREZ LUÑO, A. E. *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2005. Págs. 329-330.

manifestación del derecho a la intimidad.

I. II. Precisiones terminológicas

Partiendo de una concepción social, al hablar de intimidad³ se hace alusión a algo que es cercano al individuo, ya sea porque le es propio, o porque se proyecta en su entorno. Sin embargo, existe una dificultad respecto del concepto de intimidad: no existe un acuerdo universal y englobador de cualquier circunstancia que ayude a limitar lo que contiene ésta, ni siquiera en circunstancias cotidianas.

Junto con el término intimidad se encuentra el concepto de *privacy*, un neologismo⁴ que viene a referir el deseo de cada individuo de disfrutar de lo personal, sin intromisión ajena de por medio y que generalmente se usa para referirse al respeto por la vida privada, la publicación de información y el control de quién puede acceder a ella. El derecho a la privacidad hace referencia a las pretensiones individuales de protección que garantiza el ordenamiento al permitir el control sobre la circulación de información referida al propio individuo⁵.

Una vez discernido lo que implica cada concepto, se han de encontrar las diferencias que nos permitan distinguirlos con la mayor claridad posible. Así, mientras la privacidad trata de legitimar la protección de ese conjunto de asuntos personales que compone la esfera privada de uno, pudiéndose decir entonces que ha adquirido un sentido más dinámico, que permite controlar el acceso de extraños a lo que le es propio, sus circunstancias personales y familiares, así como la información que sobre ello pueda publicarse; la intimidad tiene un ámbito de actuación mucho más restringido, haciendo alusión a relaciones con un nivel elevado de intimidad (p.e. las relaciones sexuales).

Por tanto, se deduce de lo anterior que la distinción se concreta en la existencia de dos esferas, una privada, que se referirá a las relaciones entre individuos, es decir, a las relaciones personales y familiares; y otra íntima, que hará referencia a lo más íntimo del individuo, a lo más secreto⁶.

3 REBOLLO DELGADO, L. *El Derecho Fundamental a la Intimidad*, Dykinson, Madrid, 2005. Págs. 47-50.

4 El término deriva del inglés *privacy* o *the right of privacy* (término anglosajón).

5 PEREZ LUÑO, A. E. *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2005. Pág. 334-335.

6 PEREZ LUÑO, A. E. *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2005. Pág. 334: "La doctrina germana ha distinguido: la *Intimsphäre*...; la *Privatsphäre*...; y, finalmente, la

II. EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

El reconocimiento de un nuevo derecho normalmente conlleva la espera de un período de tiempo hasta que se consolida en el ordenamiento jurídico. Ciertamente este proceso es un claro ejemplo de lo que sufrió el derecho a la intimidad, que además vio aumentado el nivel de dificultad para su reconocimiento al tratarse de un concepto ambiguo e impreciso: “¿Hasta qué punto la actuación de una persona lesiona la intimidad de otra? ¿Cuáles son los contornos de mi derecho a la intimidad?”⁷ Estas son algunas de las preguntas a las que se tratará de dar respuesta.

II. I Primeros pasos

El origen del derecho a la intimidad data de finales del siglo XIX, a pesar de que a lo largo de la historia⁸ siempre se ha venido reconociendo la intimidad como algo inherente a la personalidad. Así, no es hasta el siglo XIX cuando, como consecuencia directa de la constante evolución tecnológica y social que tenía lugar en Estados Unidos, cada vez resultaba más sencillo entrometerse en sucesos que ocurrían a terceras personas pero que no por ello dificultaban su reconocimiento de cara al público, surge la necesidad de realizar un estudio sobre el tema, de forma que finalizara la controversia generada en cuanto a lo que debía ser considerado público y lo que debía mantenerse en privado.

Concretamente, fue en 1890 cuando se formuló la primera definición de lo que vendría a constituir el denominado derecho a la intimidad (S. D. Warren y L. D. Brandeis⁹). En ese momento, el derecho a la intimidad es concebido como *the right to privacy*, fundamentado en los conceptos de soledad y tranquilidad.

Lo que ambos juristas persiguieron fue el reconocimiento de un nuevo derecho

Individualsphere...”

7 REBOLLO DELGADO, L. *El derecho fundamental a la intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Pág. 80.

8 REBOLLO DELGADO, L. *El derecho fundamental a la intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Pág. 80. En la obra se realiza un análisis histórico de la evolución de la intimidad, que, en resumen, viene a decir que desde la época de la Grecia clásica, siendo mencionado por Aristóteles en su obra *La Política*, hasta el siglo XIX y su movimiento constitucionalista, existiendo también en la Época Romana cuando se ejercitaba la llamada *actio iniuriarum* (acción de injuria) y en la Edad Medieval a través de los Decretos de la Curia de León de 1188, concretamente en el Decreto 11 (“*También juré que ni yo ni nadie entre en la casa de otro por la fuerza, ni haga ningún daño en ella o en su heredad.*”) la intimidad del individuo se ha visto reconocida a lo largo de la historia.

9 REBOLLO DELGADO, L. *El derecho fundamental a la intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Págs. 91-96.

que aumentara el ámbito de aplicación del derecho a la vida, escudándose en el derecho a la propiedad para defender ese interés pero sin caer en la limitación del nuevo derecho a éste, es decir, buscaron que el ordenamiento se comprometiera a construir una estructura garantista de la intimidad, con el objetivo de proteger cualquier manifestación de la autonomía de la voluntad del individuo, respetándose pensamientos, ideologías y opiniones por igual.

II. II. Aproximación a la actual perspectiva constitucional del derecho a la intimidad.

Con este objetivo en mente, al legislador no le queda otra que tomar en consideración todos estos sucesos y promover la creación de un derecho que recoja las nuevas exigencias del ciudadano. Sin embargo, debido a la desinformación que existía en el momento, el derecho a la intimidad se configuró partiendo de conceptos y principios generalistas y que tienden a la imprecisión a la hora de delimitar su alcance.

Comenta PÉREZ LUÑO¹⁰ al respecto: “Por ello, tienen que acudir a complejas configuraciones, basadas en principios generales o concepciones abstractas del derecho, o a la jurisprudencia, para paliar la innegable necesidad de reconocimiento del derecho a la intimidad.”

Durante los primeros años de la segunda mitad del siglo XXI, gracias a la creación y ratificación del conjunto de Convenios y Pactos y demás documentos de carácter internacional que conforman el origen de la positivización de este derecho, se produce una clara aproximación del derecho a la intimidad respecto de la perspectiva constitucional que actualmente ostenta. Al quedar plasmado explícitamente en los textos legales, implicando su obligado cumplimiento respecto del ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea¹¹, se desdibuja progresivamente la certeza respecto del desconocimiento del alcance exacto del derecho a la intimidad y se confirma la importancia que merece un derecho de su dimensión.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 junto con el

¹⁰ REBOLLO DELGADO, L. *El Derecho Fundamental a la Intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Pág. 97.

¹¹ Al ratificar dichos documentos, los Estados Miembros se obligan a trasponer el contenido de dichos documentos a sus respectivos ordenamientos jurídicos en el plazo de tiempo más breve posible, cumpliendo por ello el objetivo que surgió en el siglo XX de implementar el *derecho a la intimidad* en los ordenamientos jurídicos de los países occidentales.

Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 sientan las bases del cambio que se produjo en relación al tratamiento que recibía la vida privada¹². A estos documentos se les suma la Declaración del Parlamento Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales (1989) o la Convención de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Comunidad de Estados Independientes (1990), que en conjunto vienen a reconocer la importancia de la intimidad y la privacidad en la sociedad actual.

De la lectura de la Declaración de 1948 se aprecia con nitidez la fuerte vinculación existente entre la intimidad y la dignidad de la persona, pudiéndose afirmar que ésta constituye el pilar fundamental sobre el que se erige el derecho a la intimidad¹³.

La Constitución Española, al incluir en su artículo 18 el derecho a la intimidad, está siguiendo las pautas marcadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cumpliendo así los propósitos comunitarios. Sin embargo, será la preocupación por la accesibilidad a la esfera íntima y privada del individuo el argumento principal para decantar la incorporación de la intimidad al cuerpo normativo constitucional, adquiriendo la categoría de derecho fundamental del ser humano. La facilidad con la que el ámbito de lo privado, de lo particular, queda traspasado provoca que el propio legislador persiga un objetivo concreto: garantizar y proteger ese ámbito privado, de forma que se logre reducir en lo máximo posible las injerencias y vulneraciones que se produzcan en dicho ámbito (la esfera íntima y personal).

El reconocimiento por parte de la sociedad de un ámbito propio y reservado se lleva a cabo a raíz de las numerosas sentencias que el Tribunal Constitucional¹⁴ dictó a finales del siglo pasado, así como del trabajo realizado por la Agencia Española de Protección de Datos. Ante la dificultad para apreciar un derecho de concepción abstracta sobre el que legislar, la doctrina ha optado por diferenciar “una vertiente subjetivo-formal y otra objetivo-material sobre el alcance del término <<íntimo>>”¹⁵, teniendo como premisa básica de la primera vertiente que el contenido de la intimidad puede fijarlo cada individuo al establecer qué aspectos de su vida pueden ser tratados como

12 REBOLLO DELGADO, L., *El derecho fundamental a la intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Págs. 101-107.

13 REBOLLO DELGADO, L., *El derecho fundamental a la intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Pág. 107.

14 STC 115/1991, de 17 de octubre, STC 231/1988, de 2 de diciembre y STC 134/1999, de 15 de julio.

15 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J. *El Derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional*, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1993. Págs. 86-89.

públicos y cuáles no. Por otro lado, aquellos que abogan por un concepto objetivo-material, proclaman que el concepto de la intimidad debe responder a una conexión lógica con el contexto social contemporáneo, es decir, será la sociedad en sí la que delimite los parámetros de la actuación del derecho a la intimidad.

Otro punto sobre el que la jurisprudencia realiza especial énfasis es la denominada intimidad corporal, la relación que existe entre el cuerpo humano y la intimidad. Al conceptuar el término, al individuo se le reconocen una serie de facultades con el objetivo de interaccionar libremente con su entorno siempre que respete esas mismas facultades conferidas al resto de ciudadanos. Así, el propósito que persigue el legislador es proporcionar al individuo la posibilidad de controlar el acceso al cuerpo¹⁶.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como resultado del esfuerzo del legislador por garantizar la intimidad corporal, recoge el siguiente enunciado: “La Constitución garantiza la intimidad corporal (art. 18.1) de la que forma parte la intimidad corporal, de principio inmune, en las relaciones jurídico-públicas que ahora importan, frente a toda indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona, cuyo sentimiento de pudor queda así protegido por el ordenamiento, en tanto responda a estimaciones y criterios arraigados en la cultura de la comunidad”.(STC 37/1988, de 15 de febrero, FJ 7)

Será ese *pudor* citado el que constituya la base garantista de la protección que tiene como objetivo proporcionar el legislador. Según el Tribunal Constitucional, “el ámbito de intimidad corporal constitucionalmente protegido no es coextenso con el de la realidad física del cuerpo humano”, de modo que no podrán “entenderse como intromisiones forzadas en la intimidad aquellas actuaciones que, por las partes del cuerpo humano sobre las que se realizan, no constituyen, según un sano criterio, violación del pudor o recato de la persona”(FJ nº. 7).

Partiendo de las premisas anteriores podría parecer que las injerencias que sufre este derecho se relacionan exclusivamente con el contenido de los derechos a la libertad de expresión o de información. Sin embargo, también tiene su repercusión en otras

¹⁶ Es un aspecto que podría conllevar numerosas variaciones, especialmente en el campo de la medicina (STC 37/1988, de 15 de febrero).

ramas del Derecho, como podría ser el ámbito laboral¹⁷ o el ámbito penitenciario, donde existe una relación especial de sujeción¹⁸. Por último, conviene advertir que en los últimos años se ha tomado en cuenta la tendencia que ha surgido en relación con el vulneración de derechos fundamentales, sobre todo en el ámbito del derecho a la intimidad respecto del derecho a la intimidad del domicilio¹⁹, y que se extiende a supuestos de derecho ambiental (caso *López Ostra*)²⁰.

Otro de los conceptos asociados con el derecho a la intimidad sobre los que enfatiza la jurisprudencia constitucional es la inviolabilidad del domicilio. Se relaciona con el derecho a la intimidad porque protege el espacio donde el individuo realiza las actuaciones que son consideradas íntimas por la doctrina, y que supuestamente habrían de quedar a salvo de miradas indiscretas. Respecto a lo que se debe entender por domicilio, el Tribunal Constitucional lo define como el “espacio donde el individuo vive ejerciendo su libertad más íntima, al margen de las convenciones sociales, así como todo espacio apto para que, eventualmente o de forma permanente, pueda ocurrir lo anterior.” Además, a efectos constitucionales, también se considerarán domicilio las segundas viviendas, los vehículos o caravanas o las habitaciones de hotel.

Desde una perspectiva jurídica constituye el espacio en el que el individuo desarrolla su vida íntima, garantizándose constitucionalmente una protección específica y especial sobre su entorno. Excepcionalmente, su vinculación con la intimidad del individuo (intimidad personal) no cabría en supuestos concernientes a personas

17 Habrá que deslindar entre (STC 186/2000, de 15 de julio) el control equilibrado y necesario que realiza el empresario sobre las actividades laborales, con aquellas actuaciones responsabilidad del empresario que puedan llegar a ser consideradas desproporcionadas (STC 98/2000, de 10 de abril)

18 STC 218/2002, de 25 de noviembre

19 STC 22/1984, de 17 de febrero (FJ 5)

20 Esta posibilidad tiene su principal referencia en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 9 de diciembre de 1994, en lo que se conoce comunmente con el asunto *López Ostra* contra España (Ayuntamiento de Lorca). En ella se condenaba al Ayto de Lorca como responsable de la vulneración de los derechos fundamentales de la Sra. López Ostra, por inmisiones acústicas excesivas. Fue el primer caso de importancia que reflejó la posibilidad de que las Administraciones Públicas pudieran perjudicar los derechos de los interesados. Esta sentencia sentó doctrina y provocó que en los últimos 20 años no hayan dejado de emitirse resoluciones judiciales condenando a las AAPP por dejaciones respecto de sus funciones en materia medioambiental, provocando situaciones de inactividad administrativa.

Extracto del comentario que realiza el abogado ARJONES GIRALDEZ, D. sobre *La (in)actividad de las administraciones locales ante la contaminación acústica: Breve comentario y propuestas al hilo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, núm. 824/2014, de 23 de octubre de 2014.*

jurídicas, como podría ser el caso de sociedades mercantiles²¹.

La Constitución Española, en su artículo 18, señala tres situaciones en las que se supera la inviolabilidad del domicilio²², permitiéndose a las autoridades la entrada y registro del mismo cuando se de el consentimiento del titular, exista resolución judicial o tenga lugar flagrante delito²³.

En lo concerniente al secreto de comunicaciones el TC también realiza ciertas aclaraciones²⁴. El artículo 18.3 CE advierte que la relación que cabría establecerse con el derecho a la intimidad es meramente formal puesto que el secreto de comunicaciones tiene entidad propia: al requerirse que las comunicaciones siempre deban ser secretas, independientemente del contenido, se dota de cierto carácter específico a este derecho.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional constata que, en su momento, existieron cuestiones aclaradas de forma ambigua respecto del alcance de la protección que el artículo 18.3 CE dotaba, es decir, si el contenido que se pudiera revelar (levantamiento del secreto) afectaba al derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. El problema parece encontrar respuesta en una Sentencia de 1984 del Tribunal Constitucional cuando enuncia lo siguiente: “No hay <<secreto>> para aquel a quien la comunicación se dirige ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier medio, de contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aún considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el concepto de <<secreto>> en el art. 18.3 tiene un carácter

21 STC 137/1985, de 17 de octubre, FJ nº3: “A su vez, el Auto de 17 de abril del año actual estableció que <<el derecho a la intimidad que reconoce el art. 18.1 CE, por su propio contenido y naturaleza, se refiere a la vida privada de las personas individuales, en la que nadie puede inmiscuirse sin estar debidamente autorizado, y sin que en principio las personas jurídicas, como las Sociedades mercantiles, puedan ser titulares del mismo, ya que la reserva acerca de las actividades de estas Entidades quedará, en su caso, protegidas por la correspondiente regulación legal, al margen de la intimidad personal y subjetiva constitucionalmente decretada>>.”

22 Artículo 18.2 CE: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

23 STC 341/1993, de 18 de noviembre; y STC 94/1996, de 28 de mayo.

24 STC 132/2002, de 20 de mayo, cita lo siguiente: “En una sociedad tecnológicamente avanzada como la actual, el secreto de las comunicaciones constituye no sólo garantía de libertad individual, sino instrumento de desarrollo cultural, científico y tecnológico colectivo”.

<<formal>>, en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado... Y es que tal imposición absoluta e indiferenciada del <<secreto>> no puede valer, siempre y en todo caso, para los comunicantes, de modo que pudieran considerarse actos previos a su contravención (previos al quebrantamiento de dicho secreto) los encaminados a la retención del mensaje. Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino, en todo caso, y ya en virtud de norma distinta a la recogida en el art. 18.3 de la Constitución, un posible <<deber de reserva>> que -de existir- tendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el contenido mismo de lo comunicado (un deber que derivaría, así del derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 de la norma fundamental)”. (STC 114/1984, de 29 de noviembre (FJ nº7))

El ordenamiento jurídico reconoce el derecho al secreto de las comunicaciones, así como su importancia respecto del conjunto de derechos fundamentales que existen en nuestro ordenamiento. Sin embargo, debido a la imprecisión que se deriva de su desarrollo normativo, para terminar de analizar la vinculación entre el derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones, se advierte obligatoria la remisión a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional²⁵. Sólo existe una excepción a esta inviolabilidad, la causada por expresa autorización de un juez, siendo recalable el hecho de que ninguna otra autoridad podrá saltarse la inviolabilidad de las comunicaciones.

II. III. Límites al derecho a la intimidad

II. III. A) Diferenciación entre el derecho a la propia imagen, el derecho al honor y el derecho a la intimidad personal y familiar.²⁶

Antes de establecer las diferencias existentes entre estos derechos, en la comunidad de juristas tiene lugar cierta controversia respecto del contenido del artículo 18 de la Constitución Española, ya que no existía certeza sobre si el precepto englobaba tres derechos diferentes o uno sólo. Finalmente, la doctrina mayoritaria reconoce que

²⁵ SSTC 81/1998 (FJ nº6), 49/1999, 70/2002, 184/2003, 281/2006

²⁶ PEREZ LUÑO, A. E. *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2005. págs. 337-341.

este artículo 18²⁷ integra tres derechos independientes, derechos inherentes a la personalidad del individuo y que se calificarán como derechos sustantivos y autónomos.

Sin embargo, esta misma doctrina mayoritaria²⁸ también considera que el derecho al honor tendría más autonomía que los otros dos aquí contenidos, al considerar que los derechos de intimidad y de la propia imagen suelen estar más ligados entre ellos. Se podría afirmar que el derecho al honor encuentra su razón de ser en el límite que suponen los derechos recogidos en el art. 20 de la CE, el derecho a la libertad de expresión y del derecho a comunicar y recibir información.

Todos ellos (art. 18 CE) son derechos personalísimos, vinculados a la dignidad humana, que implican un espacio propio y reservado, a salvo de intromisiones ajenas. Partiendo de cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional²⁹ los derechos a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen se inmiscuyen directamente en el ámbito de la vida privada, siendo su principal objetivo salvaguardar el espacio íntimo y personal que resulta inherente a la dignidad de la persona, quedando fuera del control de medios y personas ajenos al mismo. De esta forma, queda identificado su carácter personalísimo al vincularse con la dignidad humana contenida en el artículo 10³⁰ de la Constitución Española.

27 “Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”

28 Aunque parece colegirse que el deseo de los constituyentes era establecer tres derechos distintos existen estudiosos del derecho a la intimidad que podrían hacer una lectura diferente gracias a la imprecisión conceptual del precepto. Entre ellos destacan Pérez Luño, Novoa Monreal o Gómez Pavón. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto, sentando doctrina al respecto e indicando en numerosas sentencias que existen tres derechos contenidos en el precepto. Un ejemplo preciso resultaría de la lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1987 (FJ nº7), que recoge lo siguiente: “son tres los que en el mismo artículo aparecen: el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen, derechos estos entre los que si bien existen indudables conexiones y acaso, en ciertos momentos, interferencias, son distinto cual revela la dicción del citado precepto”.

29 STC 170/1987, de 30 de octubre (FJ nº 4) y STC 231/1988, de 2 de diciembre (FJ nº 2)

30 “Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se

II. III. B) Diferenciación entre el derecho a la intimidad, libertad de expresión y libertad de información.

Aunque el legislador establezca como límites al ejercicio de la vida privada aquellas actuaciones que menoscaben la Seguridad Nacional o la Seguridad Pública, el verdadero conflicto resulta del choque que tiene lugar entre el derecho a la intimidad y los derechos contenidos en el artículo 20 de la Constitución Española.

El derecho a la libertad de expresión e información ha sufrido un importante proceso de ampliación en su contenido y alcances. Así, a su tradicional referencia al derecho que asiste a toda persona de emitir y difundir libremente ideas, pensamientos o información, sin necesidad de autorización ni censura previa, se han añadido recientemente el derecho a recibir libremente la información que otros emiten o producen, sin interferencias que impidan su circulación, difusión o el acceso a ella por parte de los usuarios o receptores.

A su vez, la libertad de expresión abarca todo el proceso comunicativo, dado que protege la búsqueda o recepción de la información, la edición de la misma, así como su difusión, a través de cualquier medio de comunicación social, expresión que, a nuestro juicio, debe ser interpretada como cualquier medio que resulte idóneo para la difusión o divulgación del mensaje.

Una vez expuesto brevemente lo que se considera actualmente como derecho a la libertad de expresión e información han de establecerse los límites que se han de respetar en el ordenamiento jurídico español, es decir, aquellos parámetros que son considerados por el legislador como necesarios para que exista un equilibrio garantista entre el derecho a la intimidad y los derechos del artículo 20 CE. Para determinar la invasión de uno de ellos sobre el ámbito que protege el otro, habrá que atenerse a la relevancia que pueda tener dicha información en cuanto al interés público, esto es, si la información revelada persigue intereses meramente particulares se estará vulnerando el derecho a la intimidad de la persona sobre la que se divulga la información. Así mismo, la información proporcionada debe ser veraz, queriéndose lograr que dicha información

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

persiga un fin meramente informativo, delimitando esa veracidad a la labor de contrastación objetiva que debe realizar el informante.

Otro parámetro a tener en cuenta es el de los llamados “datos sensibles”, ya que la elaboración de juicios de valor que protege la libertad de expresión no habrá de inmiscuirse en aquella información íntima y personal que resulte inherente a la persona y que no tenga relevancia alguno para el interés general y público.

III. LA PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

III. I. Hacia un derecho fundamental autónomo.

Conforme la sociedad evoluciona a lo largo del siglo XX, sobre todo en las décadas finales, surge un movimiento general con el objetivo de avanzar científica y tecnológicamente en las ciencias de la información y la comunicación (TIC), suscitando como consecuencia, una primera aproximación del legislador a la informática y a la telemática.

III. I. A) La intimidad y la libertad informática.

La intimidad como derecho no adquiere protección constitucional hasta 1978 con la redacción de la CE, siendo la razón por la que se incluye en la misma la necesidad de establecer limitaciones al uso abusivo de la informática. En el artículo 18 de la Constitución Española (art. 18.4³¹), se plasma esta circunstancia por primera vez, positivizando la confrontación entre el derecho a la intimidad y la libertad informativa, y que se reflejará, sobre todo, en el tratamiento de los datos³².

Así, este derecho surge a partir de lo dispuesto en el artículo 18.4 CE y en virtud del Convenio nº108 del Consejo de Europa, de 1981, sobre el tratamiento informatizado de datos de carácter personal, redactado como consecuencia de las nuevas y actuales condiciones de vida. Aunque al principio fue un derecho sin demasiada fuerza normativa, se abrió paso en el ordenamiento y en la legislación hasta el punto de ser reconocido en el ámbito universal con la redacción el artículo 8 del Convenio Europeo de 1950, en el que se reconocía como derecho fundamental.

Por otro lado, en España, la transposición se realizó a través de la redacción de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD), aunque, a pesar de introducir este nuevo derecho en su Exposición de Motivos, no se precisaban los parámetros en los que se

31 Artículo 18.4 CE: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

32 Artículo 3 LOPD: “Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.”

movería, situación que se resolvería con posterioridad (LOPD). Así mismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional³³ también dió de alta este nuevo derecho a la protección de datos de carácter personal al reconocerse en varias de las Sentencias dictadas en los últimos años.

Partiendo de dichas premisas, parece claro que el objetivo primordial del artículo 18.4 CE no es otro que proteger al individuo frente a un perjudicial tratamiento de sus datos personales, implicando en consecuencia que se asegure la previsión de una serie de derechos y garantías a favor de los titulares de esos datos.

Como confrontación principal a este derecho surge el concepto de *libertad informática*, identificándose con la libertad para poder acceder a cualquier tipo de información, ya sea almacenada manual o informáticamente, sea quien sea la persona que la tenga y siempre que sea sobre sí mismo o sobre aspectos relacionados directamente con el individuo.

III. I. B) La autodeterminación informática o informativa.

La autodeterminación informativa³⁴ se define como el derecho que tiene todo individuo para controlar el acceso a sus datos personales, pudiendo ampararse en el mismo para evitar intromisiones ajenas en su espacio íntimo, y que provisiona al mismo de una serie de mecanismos legales que garantizan ese nivel de protección.

De los distintos elementos que engloba este derecho, el consentimiento del individuo recibe un énfasis especial³⁵. La importancia del mismo lo convierte en un requisito imprescindible que ha de tomarse en cuenta antes de iniciar un proceso de tratamiento de datos de carácter personal. Dicho consentimiento responde a la necesidad de proteger al afectado respecto del posible uso que terceras personas podrían hacer sobre datos que conciernen exclusivamente al individuo afectado; además, el consentimiento habrá de ser válido, expreso, inequívoco y prestado libremente, cabiendo la posibilidad de que se manifieste de forma tácita en situaciones excepcionales.

33 STC 292/2000, de 30 de noviembre.

34 MURILLO DE LA CUEVA, P. L., “El derecho a la autodeterminación informativa y la protección de datos personales”, *Azpilcueta: cuadernos de derecho*, núm. 20, págs. 43-58 (2008).

35 Artículo 6 LOPD; Artículo 7 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Como excepción, la LOPD (art. 24.1) excluye el consentimiento cuando la información pueda afectar a la Defensa Nacional, a la seguridad pública o a la persecución de las infracciones penales; además, tampoco hará falta en el caso de que los datos a recoger se encuentren contenidos en fuentes accesibles al público (art. 31 LOPD).

Conforme a lo anterior, se sucederán casos en los que se tomen datos sin el consentimiento del titular, preveyendo la ley una serie de mecanismos y facultades que permitan al mismo recuperar el control sobre ese uso desautorizado de sus datos³⁶, pudiendo oponerse al tratamiento de sus datos cuando lo justifique legítimamente (Art. 6.4 LOPD).

Respecto de dichos cauces legales, el derecho a la libertad informática reconoce entre sus pilares fundamentales el derecho de los individuos a conocer la existencia de aquellos ficheros³⁷ en los que se traten datos de carácter personal y, en particular, los derechos a acceder a los que se refieran al afectado, a rectificar aquellos que contengan errores y a cancelar los que se extralimiten de la finalidad por la que fueron recabados.

Consecuencia de la importancia que un proceso de tratamiento de datos tiene respecto del individuo al permitir que se conozcan aspectos de su vida íntima, el mismo acumula información personal que puede constituir un riesgo en forma de perfiles de la personalidad³⁸ del individuo: en función de esos perfiles se podrían llegar a tomar decisiones sobre los derechos y libertades del individuo (“automatización del tratamiento”), suprimiendo el ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Ahora bien, una vez abierto el proceso de tratamiento de datos³⁹ se habrán de

36 Los denominados Derechos ARCO: derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Se desarrollarán en el apartado correspondiente.

37 En virtud del artículo 4 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE: «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;

38 GONZÁLEZ GIL, E., *Big data, privacidad y protección de datos*, Agencia Española de Protección de Datos, 2016. Pág. 124.

39 En virtud del artículo 4 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE: “«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida,

cumplir una serie de aspectos garantistas que impedirán un uso descuidado de los mismos⁴⁰. Como consecuencia, el legislador establece un sistema de protección que, adecuándose a las exigencias constitucionales, permite que el individuo titular de los datos quede a salvo de una malversación de dichos datos.

III. I. C) Tensión entre intimidad e informática.

Para considerar la tensión existente entre ambos conceptos habrá de tenerse en cuenta que, en la actualidad, nos encontramos ante una época caracterizada por la informatización y automatización de todo lo que resulta inherente al individuo y, por extensión, a la sociedad. Nunca antes la vida de los individuos se había encontrado tan expuesta a intromisiones ajenas ni habían estado bajo este nivel de amenaza.

La evolución que han desarrollado las sociedades del siglo XXI tiene lugar, entre otros muchos factores, debido a las múltiples ventajas que la informatización de datos proporciona. Al facilitar aspectos como el acceso a determinados campos o a determinados conocimientos, así como incluir novedosas vías de comunicación, etc⁴¹, se acaba por desestructurar la anterior regulación de lo que se venía considerando como el ámbito de la intimidad personal del individuo. Sin embargo, no todo son puntos a su favor, ya que como contrapartida surgen todas las injerencias a las que podría dar lugar dicha informatización, siendo su aspecto más llamativo el problema referente a los abusos informáticos, vulnerando así el derecho a la intimidad que recae sobre los datos de carácter personal.

En cuanto a las injerencias que puede provocar esta tendencia evolutiva, se ha de destacar “el riesgo que el mal uso de la informática supone para las relaciones entre el Estado y el individuo y especialmente su incidencia para con los derechos y libertades fundamentales”⁴². Con esta afirmación, MARTÍNEZ DE PISÓN hace mención a la multitud

registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.

40 En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se han estimado recursos de amparo presentados por parte de trabajadores alegando un uso diferente de los datos personales que los empresarios les habían requerido. P.e., STC 11/1998 en el caso de datos que se pidieron para, en principio, aplicar una serie de descuentos en los salarios para sumarlos a las cuotas sindicales, cuando en realidad se utilizaron para realizar un seguimiento de la huelga.

41 MADRID CONESA, F., *Derecho a la intimidad, informática y Estado de Derecho*, Valencia, 1984. Págs. 98-111.

42 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J. M., *El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional*,

de casos en los que se puede dar un abuso informático en el sector público, dando lugar a atentados contra la intimidad de la persona sobre la que se recaban datos al poder utilizarse para maximizar el control que realizan los organismos estatales sobre la ciudadanía. El autor advierte así de la necesidad de una “firme y sólida protección jurídica que limite la actuación del Estado”.

Para tratar de solucionar las tensiones existentes entre intimidad e informática, desde los años 70⁴³, organismos internacionales y nacionales como la ONU, el Consejo de Europa o las Cortes Generales, han recomendado e implementado en los ordenamientos jurídicos correspondientes, a través de legislación específica, una serie de líneas de actuación frente a esta problemática. Sin embargo, a pesar de las Directivas y Convenios ratificados, a pesar de las normas nacionales aprobadas, la tendencia evolutiva que conlleva la tecnología en general, hace insuficiente el esfuerzo realizado, ya que los problemas se renuevan y aparecen nuevos a medida que la sociedad cambia.

La opinión que los expertos mantienen al respecto, es la de realizar una reconceptualización⁴⁴ del término intimidad, es decir, así como al principio la intimidad se movía entre conceptos como autonomía, libertad, privacidad, etc.; en la actualidad la misma adquiere una connotación enfocada hacia el control de la información que se extrae al recabar datos de carácter personal, consecuencia de la aparición de nuevas amenazas para la intimidad. Aunque parece presentarse como una tarea de difícil solución debido, sobretudo, a las dificultades que surgen a la hora de delimitar el alcance de su protección jurídica, la época en la que se desarrolla actualmente la sociedad advierte de la imperiosa necesidad de que, aunque no se puedan cubrir totalmente las lagunas que ofrece el derecho a la intimidad, se tengan en cuenta todos los escenarios posibles en los que se puedan llegar a desarrollar riesgos consecuencia de la informática.

Esta evolución se identifica en las últimas décadas con la aparición de Internet como principal medio de difusión de la información. Como consecuencia de su

Civitas, 1993. Págs. 149-150.

43 REBOLLO DELGADO, L., *El derecho fundamental a la intimidad*, Ed. Dykinson, Madrid, 2005. Págs. 301-303.

44 LUCENA CID, I. V., “La protección de la intimidad en la era tecnológica: Hacia una reconceptualización.”, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, *Revista Internacional de Pensamiento Político*, nº 7, 2012. Págs. 117-144.

aparición, surgen una serie de problemas que sólo encuentran justificación gracias a Internet, ya que, como argumenta CASTILLO JIMÉNEZ, “la exportación instantánea de los datos en la red de un país con protección del derecho a la intimidad, a otro con una protección menor y desde donde puede difundirse ilegalmente por el resto del mundo, supone la pérdida de las garantías de respeto del derecho fundamental a la intimidad⁴⁵”.

Tras puntualizar lo anterior cabe recordar que la red, aunque sea un medio de comunicación, también se configura como un medio de vigilancia, presentando un riesgo potencial sin precedentes en la historia de humanidad. La jurisprudencia⁴⁶ ha declarado que el avance tecnológico que tiene lugar en la actualidad ha obligado al legislador a extender la protección de la vida privada, ya que la única manera de alcanzar un nivel de protección óptimo para el individuo es potenciar una mejora en el ordenamiento jurídico, buscando que, a través de un aumento de la seguridad jurídica, se tranquilice a la sociedad .

Ante el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de los derechos más íntimos y personales de la población surge la necesidad de encontrar una respuesta jurídica que haga frente a dicho impacto. La prevención de múltiples mecanismos garantistas por el Ordenamiento da respuesta a esta situación ya que al ciudadano se le proporcionan una serie de instrumentos de garantía procesal mediante los cuáles podrá lograr una protección jurídica para sus derechos fundamentales. Ejemplos de tales medidas serían el conjunto de normas procesales encaminadas a la tutela de los derechos frente a abusos informáticos o las normas procesales civiles y penales encaminadas a regular las acciones judiciales tendentes a la reparación de actos ilícitos o de crímenes informáticos.⁴⁷

III. II. El Derecho de Habeas Data.

Ante las diversas vías que encuentra el Ordenamiento Jurídico para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se destaca la acción procesal del *Habeas*

45 CASTILLO JIMÉNEZ, C., *Protección del derecho a la intimidad y uso de las nuevas tecnologías de la información*, Universidad de Sevilla; MUÑOZ MACHADO, *La regulación de la red, poder y derecho en Internet*, Taurus, Madrid, 2000.

46 STC 110/1984, de 26 de noviembre (FJ nº3).

47 PEREZ LUÑO, A. E., “Las nuevas tecnologías y la garantía procesal de las libertades”, Instituto Andaluz Internuniversitario de Criminología, *Revista de Derecho UNED*, nº 11 (2012).

Data por su tendencia a garantizar la libertad del individuo frente a detenciones arbitrarias, es más, al principio fue considerado como el derecho de acceso a la información o los datos de carácter personal, con la concreta finalidad de permitir al sujeto solicitar una copia de dichos datos y revisarlos, de manera que el propósito por el que se han solicitado se concrete.

Su origen se identifica en el concepto de *habeas corpus*, mecanismo jurídico que permite al sujeto que ha sido retenido ilegalmente su puesta en libertad. Aunque existan semejanzas resulta importante aclarar que tanto una figura como la otra protegen ámbitos diferentes de la intimidad, ya que mientras que la figura que se estudia en el apartado se limita a proteger aspectos internos de la persona, su autodeterminación, sus datos personales... el *habeas corpus* se circunscribe a la dimensión física y externa de la libertad.

El objetivo de esta acción procesal no es otro que el de permitir que el individuo titular de la información que se recoge en bases de datos pueda conocer, acceder, rectificar, suprimir y prohibir la divulgación de esos datos, ya sea por un tratamiento indebido a la hora de procesarlos o porque se pretenda destinarlos a un fin distinto del que originalmente hubiese estado destinado. Se trataría por lo tanto, de un procedimiento de amparo en relación con el acceso a los datos personales del individuo con el fin de prevenir abusos informáticos o evitar un cruce ilegal de archivos que permita elaborar los llamados “perfiles de personalidad”, pudiendo ser que los mismos contuviesen calificaciones que puedan ser erróneas, afectando discriminatoriamente al titular de los datos.

Como acción procesal confiere al titular que la ejerce una serie de garantías en el proceso judicial que alcanzan expresamente a los llamados derechos fundamentales de “tercera generación”, que, según PÉREZ LUÑO⁴⁸ vendrían a ser los derechos de los consumidores, el derecho a la paz, el derecho a la protección del medio ambiente y a la calidad de la vida, el derecho a la libertad informática... Estos “nuevos” derechos resultan de la continua evolución que sufren las relaciones humanas como consecuencia de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación, es

48 PÉREZ LUÑO, A. E., *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2005. Págs. 327-331.

decir, el haber mejorado el nivel de vida de los seres humanos, conlleva una correlativa mejora de determinados derechos. Sin embargo, estas mejoras tienen como contrapartida la posibilidad de abusar de las mismas para perjudicar el disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales, siendo por ello necesario que el Ordenamiento Jurídico se adapte a las nuevas exigencias mediante la formulación de nuevos derechos.

Como respuesta, en los últimos años, se han desarrollado una serie de instrumentos o mecanismos legales orientados expresamente a la consecución de un objetivo: reducir las amenazas que presumiblemente afecten a la sociedad y elevar el nivel de seguridad jurídica perseguido por el legislador. Entre los mismos destaca la Informática jurídica documental y de gestión como ayuda instrumental en el ámbito de la Administración de Justicia para tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos.

De lo anterior, se infiere que la única vía lógica para alcanzar un nivel de seguridad jurídica óptimo es una correcta implementación de estos mecanismos que pretenden responder a los riesgos que resultan de las nuevas tecnologías, ya sea el *habeas data* o los instrumentos de que dispone la Administración de Justicia.

III. III. Derechos ARCO

Cuando en 1999 se promulga la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, derogando la denominada LORTAD, su premisa principal dispone una serie de derechos⁴⁹ en favor del interesado con el objetivo de protegerle de los abusos que puedan producirse con el avance de las nuevas tecnologías.

Este conjunto de derechos tienen la cualidad de ser personalísimos, de manera que sólo podrán ser ejercitados por el individuo que resulte interesado en el proceso de información, debiendo por tanto acreditar su identidad cuando pretenda hacer uso de los mismos. Además, existen situaciones en las que el interesado no tendrá la capacidad jurídica para ejercitarlos, siendo el caso de aquellas personas que se vean afectadas por una situación de incapacidad o minoría de edad; en estos casos podrán ejercitarse por su representante legal cuando el mismo lo acredite, o también, por su representante voluntario si resulta expresamente designado para el caso siempre que acredite su

⁴⁹ Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos <<ARCO>>). Contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; Arts. 15 y 16.

identidad y la representación que se le confiere. En consecuencia, sólo en los casos en los que no se acredite la identidad del interesado o afectado por el proceso, se procederá a la denegación de la solicitud de su ejercicio.

La aplicación de los mismos queda suspeditada al cumplimiento de dos principios básicos en la protección de datos, resultando por lo tanto, criterio ineludible para la licitud del tratamiento de los derechos ARCO. Estos principios son el de consentimiento y el de calidad de los datos⁵⁰. Respecto del primero, en el momento en el que al interesado o afectado se le requieren sus datos personales, para su recogida y almacenamiento, así como su tratamiento, previamente habrá de haber prestado su consentimiento. Para que dicho consentimiento sea válido de cara al tratamiento de los datos, antes de prestarlo, la entidad encargada de requerirlos debe informar de la forma más completa posible al sujeto en relación al propósito del dicho procedimiento. En otras palabras, el derecho de información resulta ser un requisito previo a la recogida de los datos personales del individuo afectado.

Respecto del segundo principio, el de la calidad de los datos, el legislador persigue una serie de medidas que impidan una plena libertad a la hora de hacer uso de las nuevas tecnologías, es decir, busca someter la misma a un conjunto de límites que “permitan reparar los daños que origine y evitar que se vuelvan a producir”⁵¹. Estos límites se concretarán en una serie de requisitos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal del interesado, y resultarán ser los siguientes⁵²:

A) Principio de pertinencia. Este principio viene a significar que los datos requeridos habrán de estar relacionados con el fin perseguido, debiendo por lo tanto ser “adecuados y no excesivos” al considerar la finalidad por la que han sido exigidos. Con esto el legislador quiere decir que no podrán solicitarse datos al margen de los que sean preceptivamente necesarios para la consecución de la finalidad por la que se requieren.

50 BERROCAL LANZAROT, A. I., *Derecho de supresión de datos o derecho al olvido*, REUS, Madrid, 2017. Págs. 97-105.

51 MURILLO DE LA CUEVA, P. L., *Informática y protección de datos personales*, Cuadernos y debates nº 43, Tecnos, Madrid, 1993.

52 Artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

B) Principio de finalidad. De acuerdo con la LOPD sólo cabrán requerirse datos que sean adecuados a las finalidades legítimas para las que han sido solicitadas, advirtiéndose por otra parte, que no podrán usarse para finalidades contrarias a las leyes o al orden público, citando explícitamente el artículo 4 LOPD que “no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. Además, el principio viene a establecer que una vez han sido utilizados para la finalidad para la que habían sido recabados, no podrá hacerse uso de los mismos durante período superior al necesario para su cumplimiento.

C) Principio de veracidad y de exactitud. “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. Con este apartado el legislador advierte de la necesidad intrínseca de la actualización de los datos recabados, de manera que, además de ser veraces, respondan a las situaciones que resulten en el momento.

D) Principio de lealtad. Es decir, en el momento de recabar los datos de carácter personal, los mismos habrán de obtenerse sin engaños o comportamientos fraudulentos por parte de quien los solicita.

E) Principio de seguridad de los datos⁵³. La LOPD exige al responsable del fichero que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, siendo que debido al continuo avance tecnológico que se lleva dando en los últimos años, la actuación que realice el encargado ha de estar suspenida al incremento de los riesgos que amenazan los datos recabados y almacenados, adecuándose a estos riesgos.

⁵³ Artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: “Seguridad de los datos.

1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley”.

Una vez enumerados los principios por lo que se rige la aplicación de los derechos de protección de los datos de carácter personal resulta necesario discernir, aunque sea de forma esquemática, cuáles son los llamados derechos ARCO⁵⁴, así como su ejercicio y limitaciones.

- DERECHO DE ACCESO A LOS DATOS⁵⁵.

Es el derecho de la persona afectada a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del mismo que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. La persona afectada, mediante el ejercicio de este derecho, podrá obtener de la entidad responsable del tratamiento información relativa a datos concretos o a su totalidad, siempre que acredite su identidad.

Respecto de la solicitud, el responsable del fichero será quien resuelva, y habrá de hacerlo en el plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que exista respuesta, el interesado podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

- DERECHO DE RECTIFICACIÓN⁵⁶.

54 BERROCAL LANZAROT, A. I., “Derecho de supresión de datos o derecho al olvido”, Reus, Madrid, 2017. Págs. 106-117.

55 Artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: “Derecho de acceso.

1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.
2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes”.

56 Artículo 16 LOPD: “Derecho de rectificación y cancelación.

1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificadas o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.
3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

Consiste en aquella vía legal mediante la cual el interesado o afectado, a través de su ejercicio, promueve una modificación relativa a los datos de carácter personal que resulten inexactos o incompletos. Para su aplicación se requiere que el interesado acredite lo que considera erróneo, así como la corrección que debería realizarse, siempre que se acompañe con la documentación justificativa que posibilita la rectificación solicitada.

Como ocurre en el derecho de acceso, será el responsable del fichero quien resuelva, siempre que lo haga en el plazo máximo de diez días siguientes a de la recepción de la solicitud. Cuando no reciba respuesta podrá interponer reclamación ante la AEPD.

- DERECHO DE CANCELACIÓN⁵⁷.

Su ejercicio dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo, es decir, en el momento en el que el interesado ejercita el derecho, la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, siendo conservados únicamente por las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para el supuesto en que haya que determinar responsabilidades derivadas del tratamiento de dichos datos.

La cancelación no procederá en los casos en los que los datos recabados deban ser conservados durante los plazos establecidos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y la persona interesada que justificaron el tratamiento de los datos.

En cuanto al plazo en el que debe resolver el responsable del fichero, éste será como máximo de diez días una ha recibido la solicitud.

- DERECHO DE OPOSICIÓN⁵⁸.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”.

57 Artículo 16 LOPD.

58 Artículo 17 LOPD; respecto de su tratamiento consultar el artículo 30.4 LOPD: “Procedimiento de

Recogido como novedad en la LOPD⁵⁹ viene a ser aquel derecho de la persona afectada consistente en denegar el tratamiento de sus datos, o su cese, cuando no sea necesario el consentimiento para su tratamiento consecuencia de un motivo legítimo y fundado que justifique dicha actuación, siempre que la Ley no disponga lo contrario; también cuando se trate de ficheros que tengan como finalidad la realización de actividades de publicidad y proyección comercial; por último, será ejercitable en el supuesto de que el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, salvo que esté autorizado por una norma con rango de ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del interesado, o se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estime pertinente, a fin de defender su derecho o interés.

Como en los demás derechos ARCO, el responsable del fichero será la figura que reciba la solicitud, habiendo de resolver la misma en el plazo máximo de diez días a contar desde que la solicitud es recibida. Y, como en el resto, si el interesado no recibe respuesta estará legitimado para interponer reclamación ante la Agencia Española de

oposición, acceso, rectificación o cancelación.

1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.
2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación”.

59 Aunque en la LORTAD ya se venía citando, concretamente en su artículo 29, es en esta nueva Ley (LOPD) donde se profundiza en cuanto a su ejercicio y alcance. (Artículos 17-19 LOPD):

Artículo 18 LOPD: “Tutela de los derechos.

1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación.
3. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de derechos será de seis meses.
4. Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo”.

Artículo 19 LOPD: “Derecho a indemnización.

1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas.
3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria”.

Protección de Datos.

III. IV. El Derecho al Olvido Digital.

A medida que progresa la tecnología resulta más fácil compartir, registrar, almacenar u obtener información sobre las personas, por lo que se puede asegurar que la preocupación de la ciudadanía ha crecido en lo concerniente a sus derechos informáticos. La intimidad y el derecho a la protección de datos, así como el derecho a la propia imagen y al honor, son bienes jurídicos que, en estos nuevos tiempos, resultan afectados de manera más severa que el resto de bienes jurídicos a los que el Ordenamiento ofrece protección, ya que son bienes que pueden verse afectados por la era digital con mayor facilidad.

La razón resulta bastante simple: las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) hacen que se pueda difundir a gran escala información que puede contener datos sensibles e inherentes a las personas, siendo que tampoco existen controles de calidad para evitar que esto suceda, es decir, la inmensa mayoría de las personas no conocen los límites de la difusión de información en el momento en que la realizan.

Debido a la perennidad de la información en Internet, característica que conlleva su preservación en la red indefinidamente, surge un cambio en la sociedad actual provocado por la inexistencia de verdaderas limitaciones a la publicidad y a la accesibilidad de la información, es decir, la facilidad con la que los ciudadanos, a través de los motores de búsqueda, pueden informarse sobre contenidos personales de manera antes impensable hace que el legislador conciba una herramienta, llamada derecho al olvido digital, para tratar de paliar todas estas amenazas a las que se enfrenta la sociedad de hoy en día.

Lo que el derecho al olvido principalmente pretende es otorgar al ciudadano afectado un mecanismo mediante el cual pueda realizar cierto control sobre sus datos personales en la Red, de manera que se asemeje en cierta forma a los citados anteriormente, el derecho de cancelación y, en menor medida, el derecho de oposición. En consecuencia, este nuevo derecho tendrá como principal fuente el derecho a la protección de datos personales, y defenderá el hecho de que el ciudadano pueda

cancelar y suprimir los datos cuando no resulten veraces o no exista interés público en los mismos, lo que vendría a confirmar su falta de protección constitucional.

No es sino a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE de ahora en adelante) en la que se enjuicia el caso del Sr. Mario Costeja junto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD en adelante) contra Google⁶⁰ cuando este derecho encuentra respaldo legal. Resumidamente, en el caso se hace constar que, en 1998, el periódico La Vanguardia publicó la noticia de que el Sr Costeja hubo de hacer pago a la Seguridad Social mediante la subasta de una serie de inmuebles de su propiedad, ya que previamente se le había acusado de impago a la entidad. Pues bien, una vez realizada la subasta y cubiertos los pagos, cuando con el paso de los años el periódico se digitaliza y automáticamente se almacenan en Internet dichos datos, los anuncios publicados en dicho año resultan en el momento en que cualquier individuo introduce en un motor de búsqueda como Google el nombre del afectado (Mario Costeja), datos que en 1998 sí que resultaban de interés público pero que en 2014 habían perdido dicho interés. En consecuencia el Sr. Costeja denuncia a Google y a La Vanguardia y les exige la retirada de dichos datos del ciberespacio al afectar a su derecho al honor y a la protección de sus datos personales. Tras la negativa de ambos a retirar los datos, el Sr Costeja acude a la AEPD, que desestimó su reclamación contra La Vanguardia, centrando su atención en Google. Éste recurre ante la Audiencia Nacional, que a su vez plantea una serie de cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la normativa estatal al TJUE. Finalmente, y en contra de lo argumentado por el Abogado General, el TJUE falla a favor del Sr. Mario Costeja, obligando a Google a retirar los datos de Internet.

La STJUE de mayo de 2014 sentó jurisprudencia⁶¹ en la Audiencia Nacional al

⁶⁰ STJUE de 13 de mayo de 2014, *caso Costeja vs Google*.

⁶¹ “En la sentencia del TJUE se establece que:

- La actividad de los motores de búsqueda como Google constituye un tratamiento de datos de carácter personal, del que es responsable el propio motor, dado que éste determina los fines y los medios de esta actividad.
- Ese tratamiento está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, dado que Google ha creado en un Estado miembro un establecimiento para la promoción y venta de espacios publicitarios y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado.
- Las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda, con las condiciones establecidas en la Directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho editor haya solicitado su desindexación. En caso de no atenderse su solicitud, las personas tienen derecho a recabar la tutela de la AEPD y de los

estimar el derecho al olvido digital, provocando que entre finales de 2014 y principios de 2015 numerosas sentencias fueran presentados ante el ente judicial, desestimando en su gran mayoría los recursos presentados por Google Spain. Aún así, debido a las argumentaciones fundamentales de la Audiencia, que advertía de la importancia que tenía en estos casos probar que existía un elemento perjudicial en las páginas web que el presuntamente afectado exponía, no todos los recursos fueron desestimados.

Al margen de los efectos que tuvo esta Sentencia, debe destacarse el papel que ha tenido y que tiene la Agencia Española de Protección de Datos en el reconocimiento del derecho al olvido digital y del derecho a la protección de datos.⁶²

En España, su reconocimiento no resulta hasta que, a raíz de las quejas de los ciudadanos en relación con la desindexación de datos personales por parte de los motores de búsqueda, la AEPD, a partir de 2009, incluye en sus memorias esta creciente preocupación de la ciudadanía respecto al ejercicio de sus derechos de cancelación y oposición en relación con sus datos personales. Así, empezó a dictar resoluciones que protegían al ciudadano y que legitimaban su ejercicio frente a los motores de búsqueda.

La mayoría de las resoluciones que la Agencia dictó entre 2009 y 2012 legitimaban el ejercicio por parte de los afectados de sus derechos de cancelación y de oposición basándose en los principios fundamentales del derecho a la protección de datos personales, es decir, fundaba sus fallos en el principio del consentimiento del afectado y en el principio de la finalidad por la que se indexaban esos datos. Esta situación se daba porque las reclamaciones de los ciudadanos partían de la manera en que el tratamiento de los datos era realizado por el buscador, siendo que cuando el mismo no cumplía con la finalidad dada y siempre que se causaran daños contra la dignidad de la persona afectada, el ciudadano reclamaba.

En cualquier caso resulta innegable el papel de la AEPD en el desarrollo y

Tribunales.

— El derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el mero interés económico del gestor del motor de búsqueda salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público”. GUASCH PORTAS, V. y SOLER FUENSANTA, J. R., “El derecho al olvido en Internet”. UNED. *Revista de Derecho UNED*, núm. 16, 2015.

62 SIMÓN CASTELLANO, P., *El Reconocimiento del Derecho al Olvido Digital en España y en la UE*, Bosch, 2015. Págs. 204-226.

evolución del derecho al olvido en el ordenamiento jurídico español, ya que gracias al trabajo *ad hoc* que lleva realizando desde 2007⁶³, este derecho se ha acabado consolidando. No obstante, esta doctrina resultó de difícil aplicación y adaptación para los motores de búsqueda, ya que se exige que realicen un ejercicio de ponderación y contextualización respecto de cada reclamación efectuada.

En este contexto se elabora por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 una lista de criterios con los que las Autoridades de Protección de Datos europeas, así como los motores de búsqueda, habrán de operar en cada caso concreto. Dichos criterios vienen a esclarecer la ponderación que se exige en este tipo de reclamaciones, concretando los intereses en conflicto y la confrontación entre el derecho a la información y el *derecho al olvido*. Las cuestiones más importantes a destacar, a juicio de la AEPD, tratarán temas como la responsabilidad de los motores de búsqueda, el análisis individualizado de cada caso, la no eliminación de la información, la libertad de información y expresión cuando se trate de información de interés general o sobre una autoridad pública, el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos directamente contra el motor de búsqueda, el ámbito de aplicación o el tema de los buscadores internos, que no resultan afectados por los efectos de la sentencia del TJUE. También resultan relevantes las cuestiones sobre la política de avisos, las comunicaciones a terceros o la transparencia.⁶⁴

En cuanto a su reconocimiento en la Unión Europea, proceso iniciado en 2010 por la Comisión Europea, la primera mención del derecho al olvido se da en la STJUE de 13 de mayo de 2014, que a su vez hace que la propuesta inicial de Reglamento europeo en 2012 se consolide y tome forma con la elaboración del Reglamento 2016/679 sobre tratamiento y circulación de datos personales. En el Reglamento, este derecho se ubica en la sección III, entre los derechos del interesado, concretamente en el artículo 17, determinando que su ejercicio supone eliminar los datos personales cuando se den las circunstancias que se recogen en el primer apartado del citado artículo⁶⁵.

63 SIMÓN CASTELLANO, P.: *El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE*. Bosch, Madrid, 2015. Pág. 217

64 BERROCAL LANZAROT, A. I., *Derecho de supresión de datos o derecho al olvido*, Reus, Madrid, 2017. Págs. 164-169.

65 Artículo 17: “El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir

Es por tanto un derecho a la supresión de datos, denominación de acuerdo al Reglamento europeo, que consiste en el derecho que tienen los interesados a que se supriman sus datos personales cuando el mantenimiento de los mismos en la red infrinja el presente Reglamento o el Derecho de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento.

Por el contrario existen determinados ámbitos en los que el derecho a la supresión de datos no tendrá efectos aunque se ejercite, por ejemplo en el caso de las hemerotecas digitales, boletines oficiales, etc; en estos casos se procederá exclusivamente a la eliminación del nombre y apellidos del individuo afectado de la lista de resultados del motor de búsqueda en cuestión.

Finalmente y a modo de conclusión, advertir que este derecho al olvido digital o a la supresión de datos resulta “el contrapeso de una nueva sociedad que nada olvida debido al exponencial auge de las tecnologías de la información y de la comunicación”.⁶⁶

sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 4.5.2016 L 119/43 Diario Oficial de la Unión Europea ES b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2; d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento; f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1. 2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos”.

⁶⁶ GUASCH PORTAS, V. y SOLER FUENSANTA, J. R. “El derecho al olvido en Internet”. UNED. *Revista de Derecho UNED*, núm. 16, 2015.

IV. PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD INFORMÁTICA A TRAVÉS DE LEYES DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

IV. 1. ÁMBITO NACIONAL: LORTD Y LOPD

En nuestro ordenamiento encontramos regulado este derecho en la Constitución Española, la cual establece que, al encontrarse dentro de los denominados Derechos Fundamentales, su regulación debe realizarse mediante Ley Orgánica: la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de Octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.

Su elaboración obedece al mandato constitucional contenido en el artículo 18.4 CE, es decir, se requiere al legislador que garantice mediante su redacción la protección al ciudadano estableciendo límites al uso de la informática. Así, la LORTAD, recoge una serie de medidas que permiten garantizar los derechos de protección de datos personales e intimidad de forma que pueda adaptarse a las disposiciones normativas europeas.

Como consecuencia del avance que se produjo a finales del siglo XX en el campo de la tecnología y de las ciencias de la comunicación surgen en la sociedad una serie de nuevos problemas relacionados con la intimidad y la privacidad de las personas, siendo por tanto necesario que exista una norma que prevea las consecuencias que se podrían derivar de los mismos si no se legislara al respecto: la LORTAD, a través de una estructura basada en un sistema de garantías, persigue precisamente este objetivo. Y así se refleja expresamente en el primer punto de la Exposición de Motivos de la ley al decir que “se hace preciso, pues, delimitar una nueva frontera de la intimidad y del honor una frontera que sustituyendo los límites antes definidos por el tiempo y el espacio, los proteja frente a la utilización mecanizada, ordenada y discriminada de los datos a ellos referentes; una frontera, en suma, que garantice que un elemento objetivamente provechoso para la Humanidad no redunde en perjuicio para las personas. La fijación de esa nueva frontera es el objetivo de la previsión contenida en el artículo 18.4 de la Constitución, y al cumplimiento de ese objetivo responde la presente Ley.”

La norma supone una innovación en el campo de la privacidad al incorporar conceptos como el tratamiento de datos, recalacando la importancia que tienen en esta Ley los ficheros de datos, e incluir el principio de autodeterminación informativa, es decir, se exige el consentimiento informado del titular de los datos en el momento en que cualquier institución quiera compilar datos inherentes a su persona. También incluye los derechos de acceso, cancelación y rectificación de los datos por primera vez.

Sin embargo, la importancia de la LORTAD no acaba ahí, ya que con el objetivo de garantizar la aplicación de sus disposiciones normativas, encarga su control a un órgano independiente que no será otro que la Agencia Española de Protección de Datos, aunque las funciones y competencias de la misma vendrían suspenidas a la Ley Orgánica que se dictaría para derogar la LORTAD. Así, en 1999, dicha norma fue derogada por la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)⁶⁷, debido básicamente a cuestiones de actualización y contextualización respecto de la protección de datos personales.

Esta segunda Ley en la materia fue fruto de la transposición de la Directiva 95/46, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. De esta manera se adecuaba la normativa nacional a la europea, manteniéndose en la nueva ley la misma estructura que existía ya en la LORTAD respecto de los principios de la protección de datos y de los requisitos para que el tratamiento de los mismos sea lícito, siendo las modificaciones mínimas⁶⁸.

Con el objetivo de amplificar el ámbito de aplicación de la LOPD, el Gobierno aprueba en 2007 el Real Decreto 1720/2007, por el que se crea el Reglamento para el desarrollo de la LOPD, siendo una de sus aportaciones más relevantes aquella que se relaciona con el consentimiento del titular de los datos (*autodeterminación informativa*), ya que concede que dicho consentimiento no tiene porqué ser explícito, admitiendo en su artículo 14 la licitud de un consentimiento tácito.

67 REBOLLO DELGADO, L., *El Derecho fundamental a la Intimidad*, Ed. Wylkinson Madrid, 2005. Págs. 196-202

68 MURILLO DE LA CUEVA, P. L., "La Protección de los Datos de Carácter Personal en el Horizonte de 2010", Universidad de Alcalá, *Anuario Facultad de Derecho*, 2009. Págs. 131-142.

Finalmente, y como consecuencia directa de la entrada en vigor y, por tanto, aplicación (25 de mayo de 2018) del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, actualmente se encuentra bajo tramitación parlamentaria un Proyecto de Ley de Protección de Datos, de manera que nuestro ordenamiento se ajuste al contenido del RGPD.

IV. II. ÁMBITO INTERNACIONAL⁶⁹

El Derecho Internacional tiene un papel sumamente importante en el reconocimiento y positivación del derecho a la intimidad. En dicha etapa aparece positivado por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 (Artículo 12). El precepto establece que el derecho a la intimidad personal y familiar protege al ciudadano, en virtud de la ley, contra toda injerencia o ataque y que su fundamento está, por una parte, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombres y mujeres; y por otra, en la acción de los Estados para promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

En 1950 se acuerda la emisión del Convenio de protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de Roma por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa, con el objetivo de afianzar las bases de la justicia y de la paz mundial, que en su Artículo 8 vuelve a incluir la intimidad como bien jurídico protegible.

Además el derecho a la intimidad encuentra protección y garantía en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, siendo considerado como inherente a la dignidad humana, habiendo de ser por tanto obligación de los Estados miembros promover su respeto universal y procurando la vigencia y la observancia de los derechos aquí contenidos. También se contiene en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, llamado también Pacto de New York (Art. 17).

Otros de los documentos que recogen este derecho es la Recomendación de la

⁶⁹ TOMAS MALLEN, B., *Transparencia y Protección de Datos: Nuevos desafíos para la garantía europea de los Derechos Fundamentales*, Tirant Lo blanch, Universidad Jaume I de Castellón, 2015.

OCDE de 1980 y El Convenio Europeo nº108 de Estrasburgo de 1981, para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que resulta el único instrumento vinculante en cuanto a la protección de datos.⁷⁰

El conjunto de las normativas citadas dió lugar a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos.

Dos años después, se elabora la Directiva 97/66/CE, creada para profundizar en los temas que la anterior Directiva no había hecho excesivo hincapié. En efecto, cuando en la Directiva 95/46/CE se reguló todo lo atinente al tratamiento informatizado de datos de carácter personal, algunos aspectos jurídicos y técnicos referentes a la teletransmisión de datos y a la vulnerabilidad sobrevenida de los derechos y libertades fundamentales, y, en particular, al derecho a la intimidad fueron tratados específicamente en la Directiva 97/66/CE para cubrir el vacío que la Directiva de 1995 había dejado.

Finalmente, debido al progreso que ha sufrido la informática durante los últimos diez años, así como a la elevada cantidad de datos que actualmente se procesan y tratan, con el objetivo de adaptar la normativa existente sobre la protección de datos de carácter personal, el 4 de mayo de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que consecuentemente, deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD).

- REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS⁷¹

A diferencia de las anteriores normativas europeas en la materia, elaboradas como Directivas, la nueva queda conformada como un reglamento, el Reglamento

⁷⁰ Sitio web de la AEPD: <http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php>

GIL GONZÁLEZ, E., *Big data, privacidad y protección de datos*, Agencia Española de Protección de Datos, 2016. Pág. 49.

⁷¹ BERROCAL LANZAROT A. I., *Derecho a la supresión de datos o derecho al olvido*, Reus, Madrid, 2017. Págs 43-89.

General de Protección de Datos, que persigue un fin concreto, dotar de mayor coherencia y homogeneidad a la normativa sobre protección de datos en el conjunto de países de la Unión Europea⁷². El uso de un reglamento como fuente comunitaria no ha implicado grandes diferencias respecto de las anteriores directivas, siendo la principal el hecho de que las Directivas se aplicaban vertical y no horizontalmente (los ciudadanos) al Estado incumplidor; en cambio, el nuevo Reglamento permite que cualquier ciudadano, en cualquier relación jurídica, pueda invocarlo y exigir su aplicación.

El contenido⁷³ del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), en su mayor parte, resulta similar al establecido por la Directiva que precisamente deroga y al de la LOPD, lo que no significa que no incluya nuevos conceptos y derechos que suponen un cierto cambio en este ámbito. Básicamente residen en el reconocimiento expreso del derecho al olvido digital, un modificado derecho a informar, el no reconocimiento de los consentimientos tácitos (los realizados por omisión), el nuevo derecho a facilitar la portabilidad de los datos a otro responsable o en la obligatoria designación de un Delegado de Protección de Datos⁷⁴ para determinadas insituciones, así como la obligación de realizar una Evaluación de Impacto sobre la protección datos personales.

Respecto del derecho a informar se producen ciertas variaciones⁷⁵ respecto de su anterior redacción, deduciendo de la misma un objetivo concreto que se resume en especificar lo máximo posible la exacta manera en la que deben recogerse dichos datos: se precisa que la información se facilite de forma “concisa, transparente, intelegible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo”. Además se incluyen nuevos requisitos adicionales a la hora de informar a los interesados que se enumeran en los artículos citados y que tienden a generalizar el concepto de *tratamiento*⁷⁶, siendo por tanto

72 PIÑAR MAÑAS, J. L. (Director), *REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad*, REUS, 2016. Págs. 24-29.

73 Página web AEPD:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf#Gu%C3%ADa%20del%20Reglamento%20General%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20para%20responsables%20de%20tratamiento

74 «Delegado de Protección de Datos»: persona física o jurídica, empleado en plantilla o mediante contrato de servicio, que informa y asesora al Responsable, al Encargado y a otros empleados sobre las obligaciones del RGPD y supervisa su cumplimiento, cooperando y actuando como punto de contacto con las Autoridades de Control.

75 Artículo 12 RGPD.

76 Página web AEPD:

necesario que los procedimientos diseñados conforme a la LOPD hayan de ser revisados y, en su caso, modificados por los Responsables⁷⁷ del tratamiento antes de que el RGPD se aplique.

Se producen también cambios respecto de los derechos ARCO. Por ejemplo, respecto del derecho de acceso, en la nueva normativa, se permite que el interesado obtenga copia de los datos personales objeto de tratamiento (antes no se permitía excepto para el caso del historial clínico). También se producen pequeños cambios en relación al derecho a la limitación del tratamiento de los datos de los interesados, es decir, a petición de éste no se aplicarán respecto de sus datos las operaciones de tratamiento que en cada caso correspondan.

En cuanto al derecho a la portabilidad de los datos⁷⁸, éste se contiene en el artículo 20⁷⁹ del RGPD y viene a resultar un nuevo derecho que se vincula estrechamente con el derecho de acceso. Sin embargo existen diferencias entre ambos: el nuevo derecho permite al interesado recibir los datos requeridos por el responsable del tratamiento de los mismos y transmitirlos a otro responsable, cumpliendo con el objetivo de dotar de un mayor control sobre sus datos al interesado: en la Directiva 95/44/CE el derecho de acceso obligaba al interesado a adaptarse al formato para el

<http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/modeloclausulainformativa.pdf>

«Tratamiento»: “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción” (el RGPD no hace uso del concepto de “fichero”)

77 «Responsable»: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.

«Encargado»: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

78 Página web AEPD:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/Traduc_oficial_ult_version/wp242rev01_es.pdf

79 Artículo 20 RGPD: “Derecho a la portabilidad de los datos. 1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. 3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17”.

tratamiento elegido por el responsable del mismo.

El RGPD modifica también las relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento, estableciéndose que el encargado tiene una serie de nuevas obligaciones específicas que no se circunscriben al contenido del contrato que tiene con el responsable, por ejemplo la designación de un Delegado de Protección de Datos en los casos previstos por la normativa o determinar las medidas de seguridad que se aplicarán a cada tratamiento de datos. Se obliga por tanto a que la relación entre el responsable y el encargado se formalice mediante “contrato o acto jurídico” de forma que ambas figuras queden vinculadas entre sí.

En resumen estos serían los principales cambios que establece la nueva normativa, quedando las empresas y demás instituciones obligadas a adaptar sus propias normas al RGPD antes del 25 de mayo de 2018 ya que si no lo hacen cabrá aplicarse el régimen sancionador del Reglamento, que establece sanciones con cuantías de hasta veinte millones de euros o del 4% de su facturación total, dependiendo de qué cuantía sea superior.

V. CONCLUSIONES

PRIMERA. En el siglo XXI resulta imprescindible saber qué es el derecho a la intimidad, cómo se conecta con la dignidad humana o con el carácter inviolable de la personalidad, y en qué dirección va. A pesar de la dificultad que predomina en este campo, una breve aproximación permite puntualizar que lo que la intimidad busca es favorecer contextos en los que sea posible desarrollar una autonomía individual sin obstáculos, de manera que el individuo tenga libertad para autodeterminarse sin temor a posibles coacciones que limiten esa libertad.

SEGUNDA. La evolución histórica de este derecho ha provocado que el concepto de intimidad se desligue de los conceptos históricamente asociados a la misma, facilitando la labor del legislador a la hora de adecuar la normativa.

Uno de los más relevantes resulta de la confrontación que tiene lugar entre el derecho a la información, la libertad de expresión (Art. 20 CE) y el derecho a la intimidad (Art. 18 CE), solucionada a raíz de la inclusión por parte del legislador de ciertos requisitos (véase el apartado *II.III*) que priorizarían a los derechos del artículo 20 sobre el derecho a la intimidad si se cumplen, siendo al revés si no los acatasen.

A raíz de los descubrimientos que se han dado a lo largo de las últimas décadas, el derecho a la intimidad ha expandido su ámbito de aplicación: con la aparición de Internet se preveen nuevas y variadas vías para menoscabar la intimidad del mismo en situaciones que antaño se considerarían cotidianas. Inducido por las circunstancias, el legislador queda obligado a adaptar el ordenamiento a las nuevas necesidades de la ciudadanía, apareciendo por primera vez el derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal.

TERCERA. El tercer apartado del trabajo tiene como objetivo plasmar la importancia que ha tenido y tiene en la sociedad el derecho a la protección de datos personales. Se identifica concretamente en qué consiste este nuevo derecho (véase apartado *III.I*), así como las herramientas legales de las que se proviste al ciudadano para la defensa de sus intereses (véase apartados *III.II*, *III.III*, *III.IV*). No obstante, aunque la estructura garantista del legislador se mantiene en la legislación actual resulta de apreciable importancia resaltar la continua evolución legislativa que se produce en la

actualidad, debido sobre todo, a las innovaciones que este sector de la tecnología sufre constantemente.

Además, existe a su vez cierta controversia en lo relativo a ciertos derechos apreciados en la jurisprudencia y normativa comunitaria, como se refleja en el propio trabajo de investigación (*III.IV*) con el derecho al olvido digital. Este derecho viene a consolidarse a través de la nueva normativa elaborada por la Unión Europea (Reglamento General de Protección de Datos) tras el período que ha supuesto su positivación en el ordenamiento desde la STJUE de mayo de 2014.

Así, la jurisprudencia y la normativa, tanto nacional como comunitaria, está en constante movimiento con el propósito de minimizar lo máximo posible aquellas lagunas legales causadas por la falta de coherencia en el ordenamiento jurídico: Sólo a través de un ordenamiento jurídico cohesionado se podrá llevar a cabo un tratamiento eficiente del derecho a la protección de datos y, por extensión, del Derecho.

CUARTA. Este conjunto de normas regulan la aparición reciente del derecho a la protección de datos. Su rasgo característico deviene de su continua y obligada actualización legislativa ya que, como rama del conocimiento jurídico, queda estrechamente ligada al avance tecnológico de la sociedad, suspenida a las diferentes e innovadoras herramientas que se desarrollan en la actualidad.

A pesar del arduo trabajo del legislador, el derecho informático no encierra un contenido universal aplicable, de forma que resulta extremadamente laborioso configurar un cuerpo normativo que recoja todas sus posibilidades. La Unión Europea busca paliar esas dificultades a través de la redacción del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, una norma que trata de actualizar el tratamiento legislativo que recibe esta rama del Derecho y que, concretamente, persigue homogeneizar la manera de enfocar la protección de datos de carácter personal de los países miembros.

QUINTA. Como valoración final, cabe admitir que, aunque la legislación sobre tratamiento y protección de datos personales sea básica, lo novedoso de la materia implica que su desarrollo no acabe sino de empezar, por lo que, junto con la entrada en vigor del RGPD, varios países (entre ellos España) han reaccionado a las limitaciones existentes elaborando Proyectos de Ley en materia de Protección de Datos Personales

que se aprobarán a lo largo del año 2018 y siguientes.

BIBLIOGRAFÍA

- BERROCAL LANZAROT, A. I., *Derecho de supresión de datos o derecho al olvido*, Reus, 2017.
- CASTILLO JIMÉNEZ, C., “Protección de la intimidad en Internet”, *Informática y derecho: Revista iberoamericana de derecho informático*, núms. 27-29, págs. 461-468, 1998.
- CASTILLO JIMÉNEZ, C., “Protección del derecho a la intimidad y uso de las nuevas tecnologías de la información.”, Universidad de Huelva, *Derecho y conocimiento*, vol. 1, págs. 35-48, 1998.
- GALÁN JUÁREZ, M., *Intimidad: Nuevas dimensiones de un viejo derecho*, Ed. Universitaria Ramón Areces-Universidad Rey Juan Carlos, 2005.
- GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., *Nuevos retos para la Protección de Datos Personales*, Dykinson, 2015.
- GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Una nueva exigencia de la libertad: la protección de los datos personales sensibles”, Universidad de Vigo, *Dereito*, vol. 9, nº 2, pp. 49-81, 2000.
- GIL GONZÁLEZ, E., *Big data, privacidad y protección de datos*, Agencia Española de Protección de Datos, 2016.
- GUASCH PORTAS, V. y SOLER FUENSANTANA, J. R., “El derecho al olvido en Internet”. UNED. *Revista de Derecho UNED*, núm. 16, 2015.
- GUASCH PORTAS, V., “El derecho al olvido en Internet. The Right to be forgotten in Internet.”, UNED, *Revista de Derecho UNED*, núm. 16, 2015.
- LUCENA CID, I. V., “La protección de la intimidad en la era tecnológica: Hacia una reconceptualización.”, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, *Revista Internacional de Pensamiento Político*, vol. VII, págs. 117-144, 2012.
- MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J., *El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional*, CIVITAS, Madrid, 1993.
- MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J., “Vida privada e intimidad: implicaciones y perversiones”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, págs. 717-738, 1997.
- MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J., “El derecho a la intimidad: de la configuración inicial a los últimos desarrollos en la jurisprudencia constitucional”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, págs. 409-430, 2016.

- MATE SATUÉ, L. C., “¿Qué es realmente el derecho al olvido?”, Universidad de Zaragoza, *Revista de Derecho Civil*, vol. III, núm. 2, págs. 187-222, 2016.
- MUNOZ MACHADO, S., *Libertad de prensa y procesos de difamación*, Ariel, Barcelona, 1987.
- MURILLO DE LA CUEVA, P. L., *El derecho a la autodeterminación informativa*, Tecnos, Madrid, 1990.
- MURILLO DE LA CUEVA, P. L., “Perspectivas del derecho a la autodeterminación informativa”. Universidad Oberta de Catalunya, *Revista de Derecho y Ciencia Política de UOC*, núm. 5, 2007.
- MURILLO DE LA CUEVA, P. L., “La protección de los datos de carácter personal en el horizonte de 2010”, Universidad de Alcalá II, *Anuario Facultad de Derecho*, págs. 131-142, 2009.
- NOVOA MONREAL, E., *La vida privada y el derecho a la información*, S. XXI, Madrid, 1981.
- PÉREZ LUÑO, A. E., *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2005. (9ª edición)
- PÉREZ LUÑO, A. E., “Internet y los derechos humanos”, Universidad de Sevilla, *Anuario de Derechos Humanos*, Nueva Época, vol. 12, págs. 287-330, 2011.
- PÉREZ-LUÑO ROBLEDO, E. C., “Las nuevas tecnologías y la garantía procesal de las libertades. New technologies and the procedural guarantee of liberties”. UNED, *Revista de Derecho UNED*, núm. 11, 2012.
- REBOLLO DELGADO, L., *Derechos Fundamentales y protección de datos*, Dykinson, Madrid, 2004.
- REBOLLO DELGADO, L., *El derecho fundamental a la intimidad*, Dykinson, Madrid, 2005.
- SIMÓN CASTELLANO, P. *El régimen constitucional del Derecho al Olvido Digital*, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2012.
- SIMÓN CASTELLANO, P., *El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE*, BOSCH, Madrid, 2015.